

Garoña, cara a cara con su futuro

Varias empresas cántabras y la UC, pendientes del informe que el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá hoy a favor o en contra del cierre de la central nuclear ubicada en Burgos

05.06.2009 - G. SELLERS/A. PRÁDANOS | SANTANDER/MADRID

En pleno debate sobre los cambios en la tarifa eléctrica y la liberalización del sector, y con la amenaza en el horizonte de subidas en el recibo de la luz, la central nuclear de Garoña conocerá hoy su futuro. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió ayer expresar el plazo de deliberaciones antes de elevar al Gobierno su informe sobre la planta. Lo que ocurra con Garoña no se limitará simplemente al cierre o no de una central, sino que marcará el camino del sector energético del país.

Será hoy, viernes, cuando se celebre la sexta y última de sus reuniones plenarias para dilucidar antes de la medianoche si la planta burgalesa está o no en condiciones de seguir operando con seguridad, requisito ineludible para renovar la licencia a Nuclenor (Endesa e Iberdrola), la empresa propietaria, que ha pedido diez años más de funcionamiento.

Muchas empresas cántabras se muestran expectantes ante la decisión que tome la CSN. El balance económico de Equipos Nucleares (ENSA), Tecnivad, las ingenieras Norca e Inesco y las informáticas como Merlín Cantabria y CIC, entre otras, depende en mayor o menor medida de lo que facturan a Garoña. Y no sólo se verán afectadas ellas. La Universidad de Cantabria desarrolla trabajos de investigación en colaboración con Nuclenor en el Centro de Desarrollo Tecnológico de Santander. La relación de la UC con esta empresa no es nueva, ya que a través de la Fundación Leonardo Torres Quevedo han desarrollado numerosas líneas de investigación desde hace años.

Casi cuarenta años

Garoña, en el Valle de Tobalina (Burgos), es la central más antigua del parque nuclear español. En 2011 cumplirá 40 años, la vida media estimada para la mayoría de las nucleares. La prórroga, caso de concederse, la convertiría en la primera planta atómica española que traspasa esa frontera. Falta, entre medias, el pronunciamiento inminente del CSN y la decisión final del Gobierno con una fecha límite, el 5 de julio.

El plazo para el veredicto del organismo regulador vence hoy a medianoche. Si fuera negativo, obligaría al Ejecutivo a cerrar la central por imperativo legal. Todo apunta a que no será así. La presidenta, Carmen Martínez Ten, propuesta para el cargo por el PSOE, busca la unanimidad de los otros cuatro miembros del plenario y en los últimos días se ha asentado el convencimiento de que el informe técnico será concienzudo, bien argumentado y favorable a mantener Garoña abierta con la aquiescencia de todos los consejeros, además de la propia Martínez Ten, Francisco Fernández -propuesto también por el PSOE-, Antonio Colino y Luis Gámir, ambos designados por el PP, y Antoni Gurguí, por CIU.

Esquivar la decisión

El dictamen, de hacerse público, se conocerá después del Consejo de Ministros de hoy mismo y al término de la habitual comparecencia de María Teresa Fernández de la Vega. Si el CSN no habla, la vicepresidenta se ahorrará unas primeras explicaciones sobre el futuro de la central. Y si el informe llega al filo de la medianoche, el Gobierno podrá esquivar el tema antes de las elecciones europeas del domingo porque el sábado es jornada de reflexión.

Será un respiro momentáneo porque, si se confirma el 'OK', la decisión de indultar o no a Garoña tendrá que tomarla el Ejecutivo antes del próximo 5 de julio, con Zapatero a la cabeza. Suyo es el compromiso electoral de cerrar progresivamente las nucleares cuando venza su vida útil, salvo que lo desaconsejen razones de 'seguridad energética', y de apostar sin remilgos por las energías renovables como opción estratégica de futuro para España. Y sólo el presidente puede decidir en un asunto que genera tal división de opiniones dentro y fuera del Gobierno y del propio PSOE, con ministros más proclives a alargar la licencia de operatividad de la central, como los titulares de Industria, Miguel Sebastián, y Cristina Garmendia, titular de Ciencia e Innovación, y otros partidarios de darle carpetazo. Entre estos últimos se señala a José Blanco, ministro de Fomento, y foros 'intelectuales' del PSOE, caso de la Fundación Ideas que dirige el ex ministro Jesús Caldera, también se han decantado por el cierre de Garoña.

A final, será una decisión política, aunque la industria nuclear y las empresas propietarias piden que primen las razones técnicas. En ese aspecto están seguros de haberse ganado la prórroga con los 19 millones de euros invertidos en 2008 en seguridad y remodelaciones en elementos relevantes de la central, y las cantidades similares presupuestadas anualmente hasta 2011.

Los expertos desmontan, sin embargo, afirmaciones procedentes del 'lobby' nuclear, como supuestos incrementos de la factura eléctrica de los consumidores si se cerrara Garoña. «Quien dice eso tendrá que explicarlo», afirmó Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España.

Se cierre o no, la central está más que amortizada gracias, en buena medida a subvenciones públicas, y aporta al suministro eléctrico poco más de 400 MW a la red (el 1,3% de la electricidad generada en 2008), fácilmente sustituibles por otras vías. No será con renovables, porque la capacidad eólica ya se aprovecha al máximo. «Técnicamente no había problemas, pero se tendría que reemplazar por energía térmica, de carbón o de gas por ciclo combinado», dijo Atienza, dos tecnologías que tienen en su contra la emisión de CO2 a la atmósfera.

Con el reloj en tiempo de descuento, gana terreno la posibilidad de una solución salomónica. Una prórroga abreviada, no la década pedida por Nuclenor, y condicionada a inversiones de los propietarios -Endesa e Iberdrola- en renovables con cargo a los beneficios adicionales que obtengan de Garoña en el futuro.

El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha declarado «partidario de no cerrar Garoña». También el secretario general de UGT, Cándido Méndez, apostó por mantener operativa la central si el CSN da el visto bueno. «No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguna fuente de energía», afirmó. Greenpeace recordó a Rodríguez Zapatero su compromiso electoral contra la energía del átomo. Para los ecologistas, Garoña no es segura y la decisión sobre su futuro es un test sobre la voluntad del Ejecutivo de impulsar las energías limpias, obstaculizadas -dicen- por el mantenimiento de la industria nuclear.



